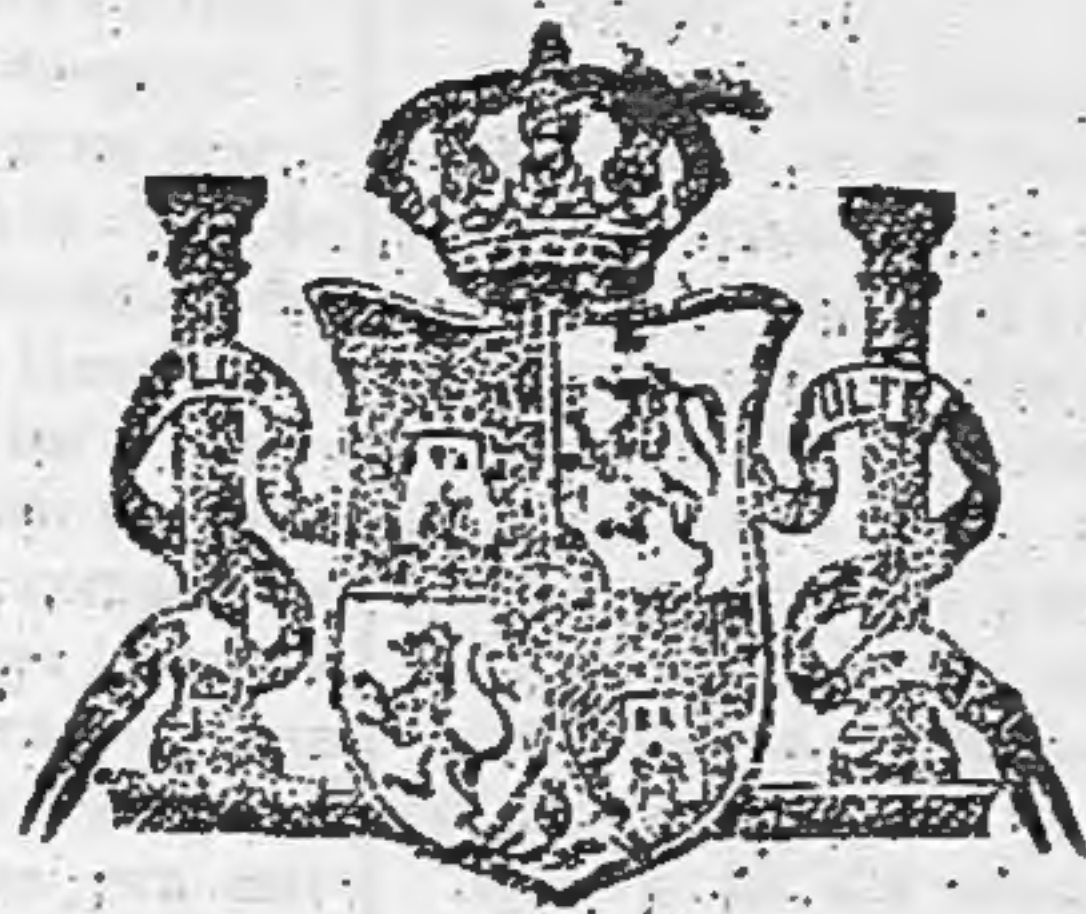


Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL

PRIMERA SECCIÓN.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (O. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en el Real Sitio de San Ildefonso sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Oviedo y el Juez de primera instancia de Laviana con motivo de un interdicto propuesto por Juan Gutiérrez contra Antonio Álvarez Cortal, de los que resulta:

Que en 14 de marzo de 1858 Antonio Álvarez, vecino de Cuerva, se dirigió al Ayuntamiento de Albar por medio de una instancia en que hacía presente que carecía de casa habitación donde vivir con su mujer e hijos, ni había sitio donde edificarla; y que como lo hubiese de común aprovechamiento en término de dicho Cuervas, suplicaba se le concediera con arreglo á equidad y justicia:

Que con arreglo á esto, por resolución que suscribió D. Federico Pola y Posada, sin que conste ni se diga por qué concepto lo hacía, se dispuso que el Teniente Alcalde D. Francisco Fernández León y el Regidor D. Francisco Fernández Castañón viesen el terreno donde se pudiera edificar, procurando no se causase perjuicio alguno, procediendo después á su tasación:

Que evacuada esta comisión, y habiendo tasado los peritos el terreno en 11 rs. por providencia que también suscribió en 11 de abril de 1858 el mismo D. Federico Pola y Posada se concedió al D. Antonio Álvarez el terreno que habían señalado los comisionados:

Que en 7 de marzo de 1861 D. Juan Gutiérrez presentó ante el Juez de primera instancia de Laviana demanda de interdicto de obra nueva contra su convecino Antonio Álvarez, porque se había puesto á construir una casa en el sitio de que se ha hecho mérito, con lo que le

ocasionaba, según decía, graves perjuicios porque desde inmemorial depositaba en aquel paraje la leña destinada á las lumbres, le utilizaba también para limpiar las castañas que recogía, y con cuyos despojos hacía abono para el mejor cultivo de sus heredades; y por último, le impedía el paso á sus canchales y le quitaba las vistas en aquella dirección:

Que, sustanciado el interdicto, el Juez dictó, auto fecha 15 de marzo de 1861 acordando la suspensión de la obra:

Que en 15 de abril posterior Álvarez acudió al Gobernador de la provincia haciéndole relación de lo ocurrido:

Que, con arreglo á esto, el Gobernador requirió al Juez de primera instancia para que se inhibiese del conocimiento del negocio, porque, según decía, el interdicto era improcedente con arreglo á la Real orden de 8 de mayo de 1839, que prohibe el que se puedan admitir cuaplo licencias a contrariar una providencia administrativa dictada en materia de la exclusiva competencia de la Administración:

Que habiendo surgido con este motivo el incidente de competencia, tanto el Juez como el Gobernador han insistido en conceptuar que es de sus respectivas atribuciones entender en el asunto que ha dado origen al conflicto, lo cual funda el Juez en que no existe acuerdo de un Ayuntamiento en el ejercicio de sus atribuciones, que pueda ser contrariado por la providencia resolutoria de un interdicto, sino solo sin acuerdo de uno que se dice Alcalde, tomado sobre materia que era de las facultades de la corporación municipal, y que debía obtener la aprobación superior. Y el Gobernador por su parte se apoya en que existe una providencia dictada por una Autoridad administrativa en materia propia de la Administración, por mas que al dictar aquella se hubiese faltado á algunas de las formalidades requeridas.

Visto el art. 7.º, párrafo tercero del Real decreto de 4 de junio de 1817, que dispone que los Jefes políticos (hoy Gobernadores) no podrán suscitar competencia en los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada:

Vista la Real orden de 8 de mayo, que prohíbe que puedan dejarse sin efecto por medio de interdictos posesorios los acuerdos y providencias que dictasen los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de sus respectivas atribuciones:

Vistos los párrafos noveno y décimo-cuarto del art. 81 de la ley de 8 de enero de 1845 sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos, según los cuales de estos deliberan, conformándose con las leyes y reglamentos, sobre enajenación de

bienes muebles é inmuebles, debiendo comunicarse los acuerdos respectivos al Jefe político (hoy Gobernador) á fin de que lleguen á obtener la aprobación necesaria para que puedan llevarse á efecto:

Considerando:

1.º Que Álvarez adquirió el terreno de que se trata precisamente con el fin de edificar sobre él una casa que le sirviese de habitación.

2.º Que si en la enajenación de la finca y condiciones con que se hizo se faltó á algunas de las formalidades que eran aplicables, y con tal motivo se intenta reclamar contra ella, debe hacerse esto por los medios que señala el referido párrafo noveno y décimo-cuarto del art. 81 de la ley de 8 de enero de 1845:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno, Vengo en decidir esta competencia en favor de la Administración:

Dado en Palacio á 9 de julio de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

(Gaceta del 20 de julio último)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de Madrid y el Juez de primera instancia de San Martín de Valdeiglesias con motivo de la posesión dada por este último á Don Tomás Cisneros de un terreno titulado la Magdalena, de los cuales resulta:

Que en 9 de enero de 1861 acudió al Juzgado de primera instancia de San Martín de Valdeiglesias el procurador D. Tomás Cisneros, a nombre y con poder de Doña Soledad Hermosilla y Doña Asunción de Torre, esta última por su calidad de tutora y curadora de sus hijos menores habidos de su difunto esposo D. Luis Hermosilla, entablando interdicto de adquirir unas tierras sitas en término jurisdiccional de dicho pueblo, al pago denominado la Magdalena, las cuales lindan por una parte con camino Real que va al puente de la Nurva, por otra con el mismo puente y camino, y por otra con el río Alberche y tierras de concejo:

Que por auto de 21 de enero siguiente el Juez mandó dar la posesión que se pretendía, cuya diligencia se cumplimentó el día 30 siguiente, fijándose edictos en la villa de San Martín de Valdeiglesias y en el Boletín oficial de la provincia, á fin de que el que se creyera con derecho

á reclamar contra la posesión pudiera hacerlo dentro de 60 días:

Que en 13 de marzo el Alcalde del pueblo remitió al Gobernador de la provincia copia del acta de una sesión del Ayuntamiento, en la que éste, asociado de 19 mayores contribuyentes, acordó pedir autorización para oponerse á la posesión dada á D. Tomás Cisneros, porque, según decía, las tierras de que se trata se hallaban enclavadas en la dehesa de Navahoncil, y hacía mas de dos siglos que el Municipio se hallaba en posesión de ellas como pertenecientes á sus propios:

Que en 5 de abril siguiente, y en virtud de excitación del Gobernador de Madrid, el Alcalde de San Martín hizo constar los límites y cabida de la dehesa de Navahoncil con remisión al catastro de 1752, de cuyo documento resultaba que el sitio de la Magdalena formaba parte integrante de la dehesa, y que bajo tal concepto el Municipio venia disfrutando, según se ha dicho, el indicado terreno lo cual acredita también por una información testifical:

Que en el mismo día 5 de abril el Alcalde, como recurso preventivo, se había opuesto ante el Juzgado á la posesión de que se trata, lo cual obtuvo después la aprobación del Gobernador de Madrid, poniéndolo en conocimiento del Alcalde con fecha 15 del mismo mes:

Que habiendo pasado el Gobernador los antecedentes de este asunto al Consejo provincial, evacuó dictamen manifestando que á su entender debía requerirse al Juez para que se inhibiese del conocimiento del negocio, y en su consecuencia el Gobernador requirió de inhibición al Juzgado en 6 de junio del año último:

Que con fecha del día 10 del expresado mes contestó el Juez que había dictado sentencia en el día 4 anterior amparando en la posesión á Doña Asunción Torre, cuya sentencia, añadía, se hallaba pasada en autoridad de cosa juzgada en virtud de no haberse interpuesto apelación por ninguna de las partes:

Que en vista de esto el Gobernador requirió de nuevo al Juez en 4 de julio, para que de un modo claro y expreso se declarase competente ó incompetente:

Que sustanciado con tal motivo el incidente de competencia con arreglo á las prescripciones del Real decreto de 4 de junio de 1817, tanto el Gobernador como el Juez han insistido en conceptuar que es de sus respectivas atribuciones entender en el asunto causa de este conflicto, lo cual funda el Gobernador en que todas las cuestiones sobre delinde de montes deben ser resueltas por la Administración, el tenor de lo prescrito en los artículos 74 y 81 de la ley de 8 de

enero de 1815 sobre organizacion y atribuciones de los Ayuntamientos, y artículo 8.º párrafo octavo de la ley de 2 de abril de 1813, que determina las de los Consejos provinciales.

Y el Juez a su vez se apoya: primero, en que la jurisdiccion ordinaria toca exclusivamente el conocimiento de todos los interdictos.

Que la sustanciacion del sol citado por Doña Asuncion de Torre habia seguido por los jueces límites, habiéndose oído a los que interpusieron, y que al Ayuntamiento, y que habiéndose dictado, publicado y notificado la sentencia de amparo a favor de Doña Asuncion, sin que contra ella se hubiese interpuesto recurso de alzada, quedó consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Que por esto el Gobernador no podia interponer contienda de competencia, porque el Real decreto de 4 de junio de 1817 prohibe hacerlo en los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y que contra ellos no caben ni pueden admitirse mas recursos que los de apelacion en el modo y forma que prescribe la ley.

Visto el art. 3.º párrafo tercero del Real decreto de 4 de junio de 1817, que dice que las Juntas políticas (hoy Gobernadores) no podrán suscitar contienda de competencia en los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Visto el art. 71.º párrafo segundo de la ley de 8 de enero de 1815 sobre organizacion y atribuciones de los Ayuntamientos, que prefiere la conservacion de las fincas pertenecientes al comun de vecinos.

Visto el art. 8.º párrafo sétimo de la ley de 2 de abril de 1813, que encomienda a los Consejos provinciales el conocimiento de todas las cuestiones contenciosas relativas al destino y a gozamiento de los montes que pertenecen al Estado, a los pueblos, o los establecimientos públicos, reservando las cuestiones sobre la propiedad a los Tribunales competentes.

Considerando que segun esta decidida en repetidas ocasiones, el juicio sumariísimo de posesion no puede reputarse comprendido en el párrafo tercero, artículo 3.º del Real decreto de 4 de junio de 1817, porque no puede llamarse pleito; ni el provido del Juez feneció el negocio, sino que, por el contrario, dejó intacto de un modo expreso el fondo del asunto.

Considerando que, ya se hayan de reputar de la propiedad del pueblo las fincas de que se trata, ya se las haya de reputar solo como colindantes con el monte de Naranjal, la cuestion cae dentro de las prescripciones del art. 8.º de la ley de 2 de abril de 1813 antes citada.

Considerando que las pretensiones de Doña Asuncion de Torre van encaminadas a alterar el estado de posesion en que, segun las diligencias hechas, se halla el pueblo de San Martin de Valdeiglesias de la finca que se trata.

Comandando con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno, y en consecuencia de la competencia en favor de la Administracion.

Dado en Palacio a 9 de julio de 1862. Esta rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Beneficencia y Sanidad.—Negociado 4.º

El Sr. Ministro interino de la Gobernacion dice con esta fecha al de Estado lo que sigue: El art. 17 de las Ordenanzas de Farmacia aprobadas por Real decreto de 18 de abril de 1800 dice, hablando de prohibiciones: "Queda igualmente prohibida la introduccion y venta de todo remedio ó medicamento galénico ó compuesto del extranjero que no se halla nominalmente consignado en el Arancel de Aduanas; y el art. 18 de las

de las mismas Ordenanzas que «Para que tenga lugar esta consignacion en el Arancel que autorizará el Ministro de la Gobernacion, es requisito una instancia de un Profesor en Medicina ó de Farmacia en que conste la composicion determinada del medicamento extranjero cuya introduccion se desea. Para resolver acerca de estas instancias procederá informe de la Real Academia de Medicina de Madrid y dictamen de la Comision de Sanidad. Ahora bien, siendo frecuentes las situaciones que hacen agudos particulares para introducir remedios ó medicamentos que no están comprendidos en el citado Arancel, cuya introduccion se rechaza por los Gobernadores de las provincias con arreglo a las citadas prescripciones, y causándose con esto perjuicios a los interesados ya españoles ó extranjeros que las solicitan, y los que no acuden a gestionar la consignacion expresada, sin duda por ignorancia, habiendo por conveniente S. M. la Reina (Q. D. G.) disponer se dirija a V. E. la correspondiente Real orden, como en su Real nombre lo ejecuto, para que por el Ministerio se dé conocimiento a los Representantes de S. M. en el extranjero encargándoles que pongan en el de los respectivos Gobiernos, cerca de los que se hallen autorizados, las razones en que se funda la no admision ó introduccion en España de los expresados remedios, y a la vez la manera de llevar a cabo la consignacion y por consiguiente la introduccion.»

Lo que de la propia Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro interino de la Gobernacion, se inserta en la Gaceta para conocimiento del público; recomendando a los Gobernadores la reproduccion en los Boletines de las provincias, y excitando a la vez su celo para que se cumpla el art. 16 de las mismas Ordenanzas en virtud del cual está absolutamente prohibida la venta de todo remedio secreto, especial, específico ó preservativo de composicion ignorada, sea cual fuere su denominacion.

Madrid 12 de julio de 1862.—El Subsecretario, Antonio Cánovas del Castillo.

(Gaceta de 22 de julio último)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion de España, a todos las que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba y confirma en todas sus partes el repartimiento de los terrenos de propios ejecutado por el Ayuntamiento de Medina-Sidonia en 1835 con autorizacion de la Diputacion provincial de Cádiz.

Por tanto:

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como militares y eclesiasticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dada en Palacio a 16 de julio de 1862.

Yo la Reina.—El Ministro interino de la Gobernacion, Antonio Aguilar y Carrea.

REALES DECRETOS.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Córdoba y la Audiencia de Sevilla sobre posesion y destino de una finca procedente del canal de Beneficencia, de los cuales resulta:

Que en virtud de lo prevenido en las leyes vigentes sobre repencion de fincas y demas clases de bienes del Estado y corporaciones civiles y otras manos muertas,

se dispuso por el Gobernador de la provincia de Córdoba, y se llevó a efecto por peritos, el destino de una suerte de tierra, nombrada de Juan Martin, sita en término de Palma del Rio, procedente del hospital de San Sebastian de la susodicha villa.

Que en fecha 3 de agosto de 1860 se anunció, que en el día 19 de setiembre posterior, y con arreglo a las leyes de 1.º de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856 é instrucción dada para su cumplimiento se verificaria la venta en pública subasta de la enunciativa finca, diciendo se halla pro indiviso con el cortijo de Azofaño, pero cuya situacion, cabida y otras circunstancias se determinaban con precision.

Que en 10 del mismo mes de agosto la Comision principal de Ventas de Bienes nacionales de la provincia ofició al Juez de primera instancia del partido de Posadas, remitiéndole tres ejemplares del número del Boletín oficial respectivo, en donde se insertaba el citado anuncio.

Que cinco dias antes del señalado para la venta, la referida Comision ofició de nuevo al mismo Juez, advirtiéndole que aun cuando en el anuncio de la venta de la finca de Juan Martin, se la habia dado como pro indiviso con el cortijo de Azofaño, no era así, porque se hallaba deslindada desde el 9 de mayo de 1856, y que se le prevenia para los efectos oportunos y con el fin de que se tuviese presente en el acto de la subasta.

Que ésta se verificó con arreglo al anuncio del Boletín de la finca en favor de D. Esteban Fernandez, y aprobada despues por la Superioridad la adjudicacion de remate, estuvo conforme el comprador siempre que se entendiese en los términos acordados por el Gobernador, por lo cual se ofició de nuevo al Juez de primera instancia de Posadas para que al otorgarse la escritura se tuviesen presentes los límites de la finca en cuestion.

Que en tal estado y con fecha 21 de febrero de 1861 acudió Fernandez al Juzgado pidiendo que al darse la posesion de la finca se deslindase y omblonase con exactitud por los mismos peritos que lo habian efectuado en 1856, fundando su pretension en que los linderos linderos y mojones se hallaban algo oscurecidos, y que a pesar de los deslindos y desamblonamientos que se habian hecho con exactitud y verdad los verdaderos límites de la finca se habían perdido.

Que habiendo accedido a dicha pretension el Juez de primera instancia por auto de 23 de febrero de 1861, remitió al de paz de Palma del Rio para que autorizase las indicadas diligencias, las cuales tuvieron lugar en 3 de marzo siguiente.

Que habiéndose devuelto despues de diligenciado el respectivo despacho, acudió Fernandez con nuevo escrito, solicitando testimonio de él, y en vista de todo el Juez dictó otro auto su fecha 13 de julio declarando nulo el de 23 de febrero y mandando que quedasen sin ningun valor las diligencias subsiguientes, y que para proceder al deslindado se hiciese saber a Fernandez manifestase quienes eran los dueños colindantes.

Que Fernandez pidió reposicion de este auto, y no habiendo accedido a ello el Juez de primera instancia, en 18 de julio declaró por admitida la apelacion que subsidiariamente se habia interpuesto para el caso de no accederse a la exposicion que en primer término se habia solicitado.

Que recibidos los autos en la Audiencia de Sevilla el día 27 de julio, y despues de algunos trámites, el excmo. Sr. Fernandez acudió al Gobernador de la provincia, haciendo relacion de lo ocurrido, y solicitando de su autoridad se declarase subsistente y bien hecha la diligencia de posesion, y que, caso necesario mandase ratificarse de nuevo por el comisionado de Ventas del partido con arreglo al art. 156 de la instrucción de 31 de mayo de 1855.

Que a virtud de esto, el Gobernador se

dirigió al Juez de primera instancia, pidiendo informe de lo ocurrido; y con presencia del Jefe de la Comision funcionaria le manifestó, ofició al Regente de la Audiencia de Sevilla, requiriendo al Tribunal para que se inhibiese del conocimiento del negocio, de lo que surgió el incidente de competencia; y sustanciado por todos sus trámites con arreglo a las prescripciones del Real decreto de 4 de junio de 1817, ha venido a resultar el presente conflicto, porque el Tribunal civil ordinario sostiene que tratándose de un juicio de deslindado, ha de sustanciarse con arreglo a lo que sobre el particular se determina en la ley de Enjuiciamiento civil, y el Gobernador de la provincia alega a su vez que es de sus atribuciones entender en el asunto, segun lo prevenido en la instrucción de 31 de mayo de 1855 y Real orden de 25 de enero de 1819.

Vista la citada Real orden de 25 de enero de 1819, que dispone que es contencioso administrativo todo lo referente a la validez ó nulidad de las ventas de bienes nacionales, y a la interpretacion de sus cláusulas y deslindos de la cosa enajenada, y declaracion de la cosa que se vendió, y la ejecucion del contrato.

Visto el párrafo octavo del art. 96 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, segun el cual toca a la Junta superior de Ventas entender en la resolucion é incidencias de ventos de fincas.

Visto el art. 173 de la misma instrucción, que previene que no se admitirá por los Jueces de primera instancia ni otras Autoridades judiciales demanda alguna contra las fincas que se enajenan por el Estado sin que el demandante acompañe documento de haber hecho la reclamacion gubernativamente y sido le negada.

Considerando que siendo la cuestion causa de esta competencia una incidencia de la finca de la finca de Juan Martin, que ha surgido antes de que el Juez de primera instancia dictara auto aprobatorio de la diligencia de posesion, y que bajo tal concepto toca entender en él a la Junta superior de Ventas, segun lo dispuesto en la ley de dicho art. 96 de la instrucción de 31 de mayo de 1855.

Considerando que aun cuando la redaccion literal del art. 173 solo habla de demandas contra las fincas, se ha de entender de toda demanda, por cuanto el espíritu del artículo, como el de todas las demas disposiciones administrativas análogas, es que no se admiten y menos de caso a ningun género de reclamaciones contenciosas, sin que el caso que las motive haya sido resuelto antes de la esfera gubernativa.

Considerando que este requisito no se ha cumplido, ni se ha tratado de cumplir en el punto que ha dado origen al presente conflicto, de lo cual es consecuencia que el Juez de primera instancia de Posadas no pudo ni debió admitir la demanda de Don Esteban Fernandez, porque su pretension no puede formar el carácter de contencioso, bien que en la esfera de lo contencioso administrativo, bien en el terreno de la jurisdiccion civil ordinaria sin que proceda resolucion de la Administracion respectiva.

Conferiéndose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno.

Vengo en decidir, esta competencia a favor de la Administracion.

Dado en Palacio a 9 de julio de 1862.

Esta rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de la Coruña y el Juez de primera instancia de su capital, de los cuales resulta:

Que ante el expresado Juez interpuso un interdicto Juan Riego como poseedor de nueve docenas partes de un molino harinero, sito en el lugar de Barreiros,

parr qu
movido
rio Can
Benito
hecho
del m
modera
llos de
unos p
e recon
sin que
ni teni
del r
titote
Que
inhibi
para el
del Re
en vis
mi at
segun
que e
los y
iam
Qu
con p
del i
lato
por a
que
qu
bicio
los p
y sol
parti
que
ejec
sosti
cual
y
Rea
prol
nada
cia
pass
y
29
ne
efe
co
ap
ria
eli
cu
to
rio
a
ni
ell
la
ti
pi
bi
pa
re
le
ce
do
m
ti
C
d
t
f
c
s
f
c

Dado en Palacio a 9 de julio de 1862.
—Está rubricado de la Real mano.— El
Ministro de la Gobernación, José de
Posada Herrera.
(Gaceta de 24 de julio último.)

TERCERA SECCION.

UNIVERSIDAD LITERARIA DE SANTIAGO.

Se halla vacante en la facultad de Medicina de esta Universidad, una plaza de Profesor Clínico, de sueldo con 6,000 rs. anuales, la cual ha de proveerse por oposición entre los Licenciados o Doctores en la expresada facultad, conforme a lo dispuesto en Real orden de 18 de junio último.

Los ejercicios serán dos y tendrán lugar en esta Universidad con arreglo a Reales órdenes de 1.º de setiembre de 1851 y 6 de octubre de 1852. El primero consistirá en la exposición de la Historia Médica completa de un enfermo, y el segundo en practicar una operación en el cadáver.

Para el primer acto se pondrán en una urna ocho cédulas correspondientes a otros tantos enfermos, de los cuales cuatro serán de medicina y otros cuatro de cirugía. El actuante sacará una cédula y pasará inmediatamente a examinar al enfermo que le haya tocado en suerte por el tiempo que fuere necesario no pasando de media hora. Concluido este examen que deberá hacerse en presencia del Secretario del Tribunal, se le comunicará dándole dos horas de tiempo para que se prepare, y haciendo en seguida delante del Tribunal la historia del mal, sus causas, diagnóstico, pronóstico, método curativo.

La exposición de la historia del mal, a la cual deberá añadir el actuante cuantas consideraciones, creyere, importantes acerca del mismo mal, no tendrá tiempo limitado, y luego que concluya, los contrincantes que habrán examinado al enfermo durante la incommunicación del actuante le harán objeciones durante veinte minutos cada uno de ellos.

Para el segundo acto el Tribunal preparará diez cédulas con otras tantas operaciones. El actuante sacará dos de las cuales elegirá una y se le comunicará inmediatamente por espacio de tres horas, dándole los auxilios necesarios para hacer la operación y los libros que pidiera. Concluido el término prelado expone detalladamente delante del Tribunal la historia de la operación que le ha cabido en suerte, expresando los diversos métodos puestos en práctica hasta el día, dando las razones de preferencia del que haya elegido, y demostrando al mismo tiempo sobre el cadáver el proceder por el que la haya practicado.

El Tribunal procederá en todos los actos de la oposición en la forma prescrita en los artículos 127, 128, 129, 140 y 141 del reglamento de estudios de 1847.

Los aspirantes presentarán en la Secretaría general de esta Universidad sus solicitudes documentadas en el término de treinta días, contados desde la inserción de este anuncio en la Gaceta de Madrid.

Santiago 29 de julio de 1862.—
El Rector, Juan José Viñals.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE MARINA DE FERROL.

Junta Económica del Departamento de Ferrol.—En virtud de Real orden de 17 de mayo último se saca a pública licitación el suministro de 12,300 quintales de cáñamo con destino a las fabricas de jarcias del arsenal de Cartagena, bajo el pliego de condiciones que estará de manifiesto en la escribanía principal de este Departamento. Y el remate ha de tener efecto el día 20 de agosto próximo empezando el acto a la una de su tarde.

Ferrol 28 de julio de 1862.—Santa Cruz.—Vicente Gonzalez.

Juzgado de 1.ª instancia de la Coruña.

Don Esteban Areal, juez de primera instancia de la ciudad de la Coruña.—Por el presente cito, llamo y emplazo a los que se crean con derecho a los bienes de Enrique Rey Canceles, natural de Ferrol, vecino de esta ciudad, para que dentro de treinta días comparezcan a usar de su derecho en este juzgado, por dependencia de los autos de abintestado que por fallecimiento de aquel me halla instruyendo.

Dado en la ciudad de la Coruña a 22 de julio de 1862.—Esteban Areal.—Por su mandado, Pelayo Iglesias de Carbajal.

Idem de Verín.

Don José Fuentes Balboa, escribano y uno de los de número y poyo del partido de Verín.—Certifico que en este juzgado por mi escribanía se sigue demanda de menor cuantía propuesta por Benito Prieto, vecino de Camba de Caramba, contra Luis de Prado, vecino de Laza en reclamación de 1,168 rs. procedentes de una mula que le dio al saido la cual sustanciada por los trámites legales y en rebeldía del demandado fecero la sentencia que a la letra dice:

En la villa de Verín a 18 de julio de 1862 En el pleito de menor cuantía que en este juzgado pende entre partes, de la una como demandante Benito Prieto, vecino de Camba de Caramba, y de la otra como demandado Luis de Prado, de Laza, sobre reclamación de 1,168 rs.

Resultando que el demandante en su escrito de demanda, alegó como hechos haber vendido al Luis de Prado una mula al fiado por la cantidad referida de los 1,168 rs. otorgando en 2 de mayo de 1859 obligación por la expuesta suma, hipotecando a su seguridad una casa y huerta al sitio de Cima de Villa en el pueblo de Laza y que el deudor y comprador desapareciera de su domicilio desconociéndose su paradero que era de derecho que el hombre de cualquier manera que se obligue, queda obligado que en virtud de la obligación exhibida tenía acción hipotecaria para perseguir la hipoteca dada en garantía de dicho crédito; que el Luis de Prado era moroso, debiendo de condenarse al pago de las costas; y que si bien no presentaba juicio de conciliación, estaba relevado de hacerlo por interesar inacción contra un ausente a quien correspondía juzgarle en rebeldía, pidiendo en su consecuencia se condenase al Luis de Prado al pago de los 1,168 reales.

Resultando, que citado y emplazado a medio de edictos, no ha comparecido el Luis de Prado, declarándosele rebelde, y por contestada la demanda; y

Resultando que recibido el pleito a prueba el demandante propuso y ha dado en tiempo legal la que tuvo por conveniente:

Considerando que de la prueba prac-

ticada, resulta suficientemente justificada, resulta suficientemente justificada, do ser el rebelde Luis de Prado deudor al demandante de los 1,168 rs. de la procedencia que este último explica, siendo obligación pura e incondicional absolutamente la que el demandado hizo, en favor del Benito Prieto.

Considerando que en la compra y venta, el vendedor así como tiene obligación de entregar la cosa, el comprador también la tiene de entregar el precio convenido, a cuya obligación faltó, el Luis de Prado, haciéndose acreedor a la condena de costas, otra de la petición que interpuso en escrito de demanda.

Visto.
Fallo: que estimando la demanda, debo de condenar y condeno al Luis de Prado al pago de los 1,168 rs. y en las costas, mandando que esta sentencia sea notificada en los estrados de la Audiencia y que se haga notoria en el Boletín oficial de esta provincia, por la que, definitivamente juzgando, así lo pronuncio, mando y firmo, ante el presente escribano que de ello da fe.—Nicolás Alvarez Cienfuegos.—Ante mí, José Fuentes.

Cuya sentencia fué notificada al Benito Prieto y en los estrados de esta Audiencia por ausencia y rebeldía del Luis de Prado, en 19 de julio corriente.

Y para que tenga efecto la inserción en el Boletín oficial de esta provincia la sentencia inserta, según en la misma se previene, libro el presente que firmo en Verín a 30 de julio de 1862.—José Fuentes.

El Lic. D. Nicolás Alvarez Cienfuegos, juez de primera instancia del partido de Verín.—Por el presente se cita, llamo y emplazo a todas las personas que se crean con derecho a la herencia legítima de José Rodríguez, vecino que fue de San Cristóbal de Medeiros, para que dentro del término de veinte días a contar desde la fijación del presente edicto en el Boletín oficial de la provincia se presente en este juzgado, por el oficio del infrascrito escribano a ejercitarlo en expediente de testamento la que se está instruyendo; bajo apercibimiento de no admitirse a la dicha expedición la reclamación que correspondiera para tales efectos el perjuicio que haya lugar.

Dado en Verín a 30 de julio de 1862.—Nicolás Alvarez Cienfuegos.—De su mandado, Manuel D. Ferreiros.

Idem de Celanova.

Don José María Iglesias, escribano por S. M. de número del juzgado de primera instancia de Celanova.—Certifico que la Superioridad se ha recibido en este juzgado certificación que comprende la Real sentencia del tenor siguiente:

En la causa que ante nos pende entre el fiscal de S. M.; Miguel Fernandez y Garria, de 36 años de edad, casado, labrador; Ramon Baquero y Fito, de 32 años, casado, labrador, naturales y vecinos de Santa María de Entrambasías, representados por el procurador D. Juan García Morales, y Antonio de Rego en rebeldía, sobre falso testimonio.

Visto, y observados los términos legales, habiendo sido ponente el Ministro D. Juan Menéndez.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho que contiene la sentencia del juez de primera instancia de Celanova, pronunciada en 9 de mayo último, por la que se condena a Miguel Fernandez, Antonio de Rego, y Ramon Baquero, en 12 duros de multa a cada uno y en las costas y gastos del juicio, que pagará mancomunadamente el Fernandez por insolencia de los otros procesados, y en prisión subsidiaria en este caso.

Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos la expresada sentencia, con las costas y gastos del juicio, nuevamente causadas, pero entendiendo alzada la mancomunación, y que la prisión sub-

diaria que en caso de insolencia tengan que sufrir los penados, sea solamente en cuanto a la multa y gastos, y no por las costas, sin perjuicio de oír al Antonio de Rego si se presentare ó fuere habido; Absuélvese a efecto respecto a Ramon Baquero y Miguel Fernandez.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando en grado de vista, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Valdés.—Juan Menéndez.—José Salazar.

Cuya Real sentencia fué pronunciada en 14 de los corrientes.

Y para su inserción en el Boletín oficial de esta provincia, conforme a proveído de esta fecha libro el presente testimonio en esta pliego papel de oficio.

Celanova julio 30 de 1862.—Por el originario, José Camino Recio.

Idem de Mondoñedo.

Llama, cita y emplaza a Josefa Teijeiro (a) Chinchu, natural de la Vega de Rivadeo, cuyas señas se insertan a continuación, para que se presente en la cárcel pública de este partido dentro de treinta días siguientes a la inserción del actual anuncio en el Boletín oficial de las provincias de Galicia y Orense, a rendir declaración indagatoria y responder a los cargos que contra ella resultan de la causa que pende en dicho juzgado por hurto de una mantilla y una manta de Dominga Fernandez, de la mencionada ciudad; advertida de que si comparecer al pleito, marcado. Y si la vez, excusa a las autoridades para la captura y remisión de la misma a disposición del propio juzgado.

Mondoñedo julio 19 de 1862.—Antonio T. Sas.—De su mandado, Antonio Ferreiro.

Señas.—Estatura corta; pelo; cejas y ojos castaños; nariz un poco roma; hoyosa de virtudes; viste ordinariamente de zorraza y pañuelos a la cabeza y cuello.

Ayuntamiento de Villardebós.

Para poder formar con la exactitud correspondiente el amillaramiento que debe servir de base para el repartimiento de inmuebles, cultivo y ganadería de 1863, este Ayuntamiento, acordó reclamar, tanto de vecinos como forasteros, las relaciones juradas que dispone la instrucción y posteriores referencias al objeto, en el preciso término de quince días desde la fecha de su inserción en el Boletín oficial de la provincia; con la advertencia que no verificándolo, se conforman con la riqueza imposible con que figuran en el repartimiento del presente año.

Villardebós julio 30 de 1862.—El Alcalde Presidente, Domingo Barreiro.

SECCION DE ANUNCIOS.

Continúa en la ciudad de Santander el depósito de las verdaderas PIEDRAS DE MOLINO del bosque de la Barra en la Forté-sous-Jouarre, a cargo de D. Juan de Abarca, quien garantiza su buena calidad, arreglándolas a precios convencionales, y haciendo las remesas, si así se le encarga, al punto que se le designe.

En el mismo depósito las hay también procedentes de Francia y de calidad enteramente superior, con la circunstancia de ser de piedra maciza, en vez de tener como todas las demás una gruesa capa de yeso.